



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS POLÍTICOS



FLACSO
CHILE

MANO DURA Y EROSIÓN DEMOCRÁTICA EN COSTA RICA

RESUMEN EJECUTIVO



El presente estudio¹ "Mano dura y erosión democrática en América Latina", desarrollado por FLACSO y el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile² buscó explorar la interacción entre las políticas de seguridad de mano dura y la salud de las instituciones democráticas en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, países con una exposición histórica limitada a este tipo de medidas. El estudio tiene un documento de contexto, así como un estudio en profundidad de la información cualitativa y cuantitativa, a continuación, se resumen los principales hitos de la investigación³.

¹ Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de la FLACSO Chile y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

² Elaborado por Lucía Dammert, Sebastián Cutrona, Mary Fran T. Malone, Jonathan D. Rosen y Manuela Gil.

³ Para más información consultar <https://flacsochile.org/mano-dura-en-america-latina>

Concepto de Mano dura

Debido a la multiplicidad de significados que tiene la mano dura en la literatura académica y la conversación ciudadana es significativa. En América Latina las iniciativas de mano dura se han desarrollado principalmente en los países Centro Americanos, sin embargo el concepto se ha difundido a prácticamente todos los países donde no es extraño escuchar propuestas e incluso políticas autodefinidas como de mano dura. Si bien la mayoría de iniciativas han tenido resultados particularmente negativos, en el periodo post covid19 las políticas desarrolladas por el presidente Bukele en El Salvador han vuelto a instalar estas propuestas como alternativas de acción. Sin duda, los logros en la disminución de homicidios y extorsiones son indicadores que generan atención política y ciudadana en toda la región.

En este contexto, se propone una conceptualización que reconoce múltiples dimensiones de la mano dura, destacando cuatro (Cutrona et al., 2024):

- **Mano dura institucional:** Refiere a las políticas que emergen desde la institucionalidad del Estado y se ejercen dentro de los marcos normativos vigentes, como el endurecimiento de penas o el uso formal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
- **Mano dura encubierta:** Involucra acciones que escapan del marco normativo y se ejercen de manera discrecional y oculta, incluyendo actos de discrecionalidad judicial, policial e incluso militar.
- **Mano dura performativa:** Consiste en la proliferación de discursos punitivistas que buscan convencer a la audiencia de la urgencia y relevancia del tema de la seguridad ciudadana, sin necesariamente implicar la adopción de iniciativas formales o informales.
- **Mano dura civil:** Reconoce tanto las acciones de la ciudadanía como los discursos de ciertos medios de comunicación que amplifican la narrativa sobre la necesidad de medidas estrictas para el control ciudadano.

El estudio busca entonces identificar la percepción ciudadana sobre estas medidas, su viabilidad y además apoyo en países donde los índices delictuales son significativamente más bajos que aquellos de América Central y donde las iniciativas de mano dura no han sido centrales en la agenda política. A continuación, se presentan los principales resultados de Costa Rica.

Contexto de la situación de criminalidad

Costa Rica, tradicionalmente vista como una excepción en Centroamérica por su estabilidad en salud pública, educación y gobernabilidad democrática, ha visto amenazada su reputación en los últimos años debido al aumento drástico en las tasas de homicidio, que alcanzaron un récord de 17,3 por cada 100.000 habitantes en 2023. Este incremento ha intensificado el miedo al crimen y generado dudas sobre la capacidad del sistema de justicia para abordar la crisis.

El país, caracterizado por niveles más bajos de desigualdad y una mayor homogeneidad racial y cultural en comparación con sus vecinos, ha disfrutado de una cultura política más igualitaria, ya que los residentes tienden a percibir menos distancia social entre ellos y sus conciudadanos. La abolición del ejército y la inversión en programas sociales y educativos dieron lugar a una policía que actúa principalmente como un servicio público, en lugar de un aparato represivo.

Desde la década de 1960, Costa Rica ha implementado varias reformas para mejorar el profesionalismo de la policía, como la Ley General de la Policía de 1994, que buscó reducir el clientelismo y promover una fuerza más apolítica. La creación de la Fuerza Pública y programas de prevención comunitaria han sido elementos clave en este proceso. Sin embargo, la policía enfrenta nuevos desafíos debido al aumento del crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas principalmente.

El aumento de la criminalidad es evidente, se han elevado las tasas de homicidio y victimización a niveles comparables con países con peores historiales de seguridad en la región. Esta situación ha llevado a una orientación hacia políticas de seguridad más punitivas y un incremento en las actitudes antiinmigrantes, especialmente contra los nicaragüenses, frecuentemente culpados por el aumento del crimen.

Durante la presidencia de Laura Chinchilla (2010-2014), se buscó equilibrar prevención y medidas duras sin excesos punitivos. Su sucesor, Luis Guillermo Solís (2014-2018), promovió políticas integrales centradas en la educación y oportunidades laborales para combatir el crimen organizado, pero Costa Rica alcanzó un récord de 603 homicidios en 2017, y la seguridad pasó a un segundo plano en las elecciones de 2018. Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) no priorizó el crimen en su campaña y sus propuestas para controlar las armas fueron criticadas por falta de coherencia. En 2019, se enfocó en la seguridad fronteriza, pero sus medidas fueron consideradas limitadas.

Finalmente, el presidente Rodrigo Chaves Robles (2022-2026) enfrentó una creciente crisis de seguridad con altos índices de homicidios y violencia. Propuso diez nuevas políticas, como penas más severas y decomiso de activos, rompiendo con la tradición de equilibrar medidas punitivas y preventivas. De hecho, el 2023, el 33,8% de la población identificó la seguridad como el problema más grave del país⁴

La percepción pública de la policía ha oscilado a lo largo de los años. Aunque inicialmente positiva durante el siglo XX, las opiniones comenzaron a deteriorarse en la década de 1990, afectadas por la corrupción. La confianza disminuyó en 2006 debido a un aumento en los delitos violentos, aunque se estabilizó para 2018. A pesar de una recuperación temporal, la percepción de corrupción ha impactado negativamente la confianza pública.

La realización de diversos grupos focales en la ciudad de San José⁵ nos permite relevar algunos hallazgos que consideramos son fundamentales para marcar el contexto nacional y los desafíos que implican las iniciativas centradas en la mano dura.

Hallazgos

La criminalidad se percibe como un fenómeno externo que amenaza la identidad nacional costarricense, generando dos narrativas contrastantes pero complementarias sobre la mano dura. Una sostiene que se necesita mano dura para proteger la amabilidad y

⁴ Barómetro de las Américas, LAPOP 2023.

⁵ Los grupos focales se desarrollaron entre los días 18 y 30 de mayo, y fueron compuestos por un total de 47 participantes en San José en distintas partes de la ciudad, distribuidos en ocho grupos (de seis o siete participantes). Para capturar las diferentes percepciones de seguridad por género, se desarrollaron cuatro grupos de mujeres, dos de hombres, y dos grupos mixtos.

pacifismo costarricense de posibles abusos, mientras que la otra defiende que estos mismos atributos deben ser preservados, opuestos a las políticas de mano dura.

El narcotráfico es visto como el principal motor de la delincuencia y la inseguridad, facilitando el ingreso irregular de extranjeros y afectando principalmente a jóvenes vulnerables. Esto fomenta discursos anti-migración y apoya la adopción de políticas de mano dura.

El discurso en Costa Rica se centra en políticas de mano dura institucional, como el endurecimiento de penas y el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Se aboga por reformas legales más estrictas y que el Poder Judicial actúe con firmeza para evitar la “puerta giratoria” de los criminales.

Existe un llamado a endurecer las condiciones en las cárceles, aumentando los castigos y haciendo que sean más severos para dar una señal de consecuencia. Los derechos humanos son vistos como una barrera para combatir la delincuencia, y la cadena perpetua, trabajos forzados y flexibilización de la edad penal mínima son propuestas defendidas.

La posibilidad de restituir las Fuerzas Armadas, suprimidas en 1948, ha sido discutida. Aunque no hay consenso unánime, los jóvenes muestran más apoyo hacia esta idea para controlar el crimen.

Los jóvenes están más inclinados hacia una mano dura activa, admirando figuras como Bukele, mientras que los adultos mayores prefieren una mano dura orientada al orden y respeto por la ley, balanceando medidas de prevención y punitivismo.

Las acciones fuera del marco normativo, como discrecionalidad judicial o policial, no se discuten ampliamente. El enfoque está en las posibilidades de acción institucional.

Hay acuerdo en que el Poder Ejecutivo debería tener más atribuciones para enfrentar la delincuencia rápidamente, a pesar de la preocupación por comprometer la separación de poderes y la idiosincrasia costarricense. Se valora el refuerzo de la Fuerza Pública y se perciben signos de deslegitimación del actuar policial.

A pesar de las preocupaciones sobre la pérdida de rasgos identitarios, se reconoce que hay espacios institucionales para enfrentar la criminalidad, lo que sugiere una apertura para limitar iniciativas que debiliten las instituciones o los derechos fundamentales.